

En Idaho, EE.UU., están partiendo desde cero

Según un estudio del think tank Mercatus Center, el estado menos regulado de Estados Unidos es Idaho. Y un mérito importante en este logro lo tiene el programa "Regulación Base Cero".

Ante eso la solución sería ampliar. "En vez de asumir que la regulación sirve y que hay que revisarla de a poquito, asumen que no sirve", y que cada norma va a tener que justificarse desde cero.

El Manhattan Institute ha estudiado el caso de Idaho y destaca que uno de los pilares de la "Regulación Base Cero" es que antes de que una regulación entre en vigor, la agencia que la creó debe entregar información certera de sus costos y beneficios.

Por ejemplo, si en Idaho una agencia gubernamental exige 20 horas de capacitación continua para una determinada ocupación, pero en Montana solo se requieren 15, Idaho debe bajar su exigencia a 15 horas, a menos que se logre justificar por qué en este último estado se precisa cinco horas más de entrenamiento.



En el portal nacional de salud los doctores pueden acceder al historial médico de los pacientes.

Estonia, un país digital

En Estonia todos los trámites se pueden realizar por internet. Bueno, casi todos... para contra matrimonio o divorciarse, solo en esos casos, los estonios deben ir a una oficina.

Es que el 99% de los servicios públicos está digitalizado, para lo cual ha sido clave el documento de identidad. Este, desde 2002, incluye un chip con un código único e inviolable, que en el fondo es un sistema que proporciona acceso a todos los servicios online que ofrece el país báltico para sus ciudadanos: votar, pagar los impuestos, el estacionamiento, acceder al banco o al alojado portal nacional de salud.

Este último permite que, mediante un código único de identificación, los doctores puedan acceder a todo el historial médico de un paciente, independientemente de dónde haya sido atendido previamente.

En el portal los pacientes también pueden declarar, por ejemplo, si quieren ser donante de órganos. Además, otros entes públicos, como la Oficina de Seguridad Social, utiliza estos datos para evaluar el grado de discapacidad de una persona que está pidiendo una pensión asociada a esa condición.

En el portal los pacientes también pueden declarar, por ejemplo, si quieren ser donante de órganos. Además, otros entes públicos, como la Oficina de Seguridad Social, utiliza estos datos para evaluar el grado de discapacidad de una persona que está pidiendo una pensión asociada a esa condición.

Asimismo, existe un sistema centralizado de recetas médicas electrónicas, a las que pueden acceder las farmacias una vez que el paciente muestra su identificación.

A tanto llega la digitalización de los servicios públicos que algunos cálculos hacen que los estonios, en promedio, se ahorran cinco días laborales al año al no tener que ir físicamente a oficinas públicas para realizar trámites.

Y los avances continúan: a fines de este año el país báltico debería lanzar oficialmente el programa Bürokratt, un asistente digital que, mediante un comando de voz similar a Siri, pretende ayudar a los ciudadanos en actividades como enviar solicitudes y efectuar pagos. Incluso, la idea es que el propio programa comente a los ciudadanos para recordarle si necesitan completar un trámite, como renovar una licencia de conducir o presentar su declaración de impuestos.

Australia: Privatizaciones, desregulación en la política habitacional y capacitación en inteligencia artificial

Las reformas que en la década de los 90 se llevaron a cabo en el estado de Victoria han sido consideradas las más radicales que se han realizado en Australia. ¿Cuáles eran sus principios rectores? "Asignación clara de responsabilidades en la rendición de cuentas, empoderamiento de los consumidores, con un traspaso de fondos a los agencias públicas, metaforas y presupuesto, además del uso de incentivos para impulsar un mejor rendimiento", según describió en un artículo publicado por el CEP Janine O'Flynn, directora del Crawford School of Public Policy.

El gobierno australiano se inspiró en reformas realizadas previamente en Nueva Zelanda y Reino Unido, como las licitaciones competitivas obligatorias. Sin embargo, Victoria fue mucho más allá que esos países y emprendió también la privatización de servicios como las cárceles y el transporte público, entre varios otros.



Daniel Andrews, ex primer ministro de Victoria, lanzó en 2023 una ambiciosa política habitacional.

Asimismo, a fines de 2023 el entonces primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, anunció cambios y desregulaciones importantes en la política habitacional para los siguientes diez años. Con el propósito de construir 800 mil viviendas, se estableció que los plazos para aprobar las solicitudes de permisos se reducirían de 12 meses o más a cuatro meses. De igual modo, algunas de estas viviendas, dependiendo de sus características,

podrán ser aprobadas en un plazo de 10 días.

En el caso de Australia, un plan aprobado en 2010 sentó las bases de un renovado enfoque en innovación, alto rendimiento y el desarrollo de un servicio público para abordar mejor los desafíos del siglo XXI, y convertirse en el mejor del mundo.

En ese contexto, ha llevado a cabo importantes reformas en salud, enfocadas en reducir las atenciones médicas presenciales. Para ello es clave The my health app, que permite a los ciudadanos, entre otras funciones, revisar su historial médico, sus diagnósticos; controlar sus signos vitales y analizar resultados; información a la que puede acceder el personal médico.

Por otra parte, un grupo de 7.600 empleados públicos, de más de 60 agencias del gobierno australiano, recientemente terminó una capacitación de seis meses en inteligencia artificial generativa, concluyendo que logran ahorrar hasta una hora de trabajo diario en tareas propias de sus funciones. El 86% de los funcionarios expresó sus deseos de seguir utilizando herramientas de inteligencia artificial en su trabajo; el 69% afirmó que le ayudó a agilizar el cumplimiento de tareas y el 61% cree que las herramientas mejoraron la calidad del resultado de su labor.

Experiencias internacionales:

La "motosierra" de Milei, los planes de Musk y las reformas que han aplicado otros países

Los intentos de modernizar el Estado se han traducido en iniciativas como un servicio público 99% digital, "derogar" todas las normas para reemplazarlas y hacer competir a los puertos.

EQUIPO DE CRÓNICA PARA EL FUTURO

"¡P" o lo menos traigan a los amigos a ver!". Eso escribió el ministro argentino de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al anunciar el fin del subsidio a las películas que sean "fracasos comerciales".

El reputado economista maneja la denominada "motosierra" del Presidente Javier Milei, con la cual pretende desregular, reformar y modernizar el Estado, para hacer más eficiente el gasto público. Y ya ha dado varios pasos, partiendo por la desvinculación, hasta fines del año pasado, de 33 mil empleados públicos, y la aplicación de un "examen de idoneidad" a trabajadores del Estado para asegurar que tengan los conocimientos básicos para desempeñar su labor.

En noviembre comenzó a operar el silencio administrativo positivo en cerca de 500

trámites, los que se considerarán aprobados si un ciudadano que los realiza no recibe respuesta de la administración en un plazo de 60 días. Antes el silencio implicaba rechazo. Para este año también se planea avanzar en la eliminación de un lento y costoso trámite por el cual el Instituto Nacional de Tecnología Industrial debe homologar cada auto que se importa en Argentina. Esto allanaría el camino para que, en el futuro, se puedan importar vehículos por parte de particulares. Asimismo, se establecerá la licencia de conducir sin vencimiento (la actual tiene una vigencia de cinco años). Para solicitarla no habría que hacer ningún trámite presencial, sino solo certificar el estado psicofísico de la persona, mediante una declaración jurada que se realizaría por internet.

Al igual que Milei, el Presidente electo

Donald Trump también creó un organismo para, en su segunda administración, que comienza el 20 de enero, combatir la burocracia y la sobrerregulación: el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el que estará a cargo del multimillonario Elon Musk, quien compartirá responsabilidades con el empresario Vivek Ramaswamy.

Si bien aún no se conocen en profundidad las acciones que adoptarán, The New York Times señaló el miércoles que están reduciendo ejecutivos para que pasen seis meses dentro de las principales agencias gubernamentales con el fin de reducir costos. Se señala que es una estrategia similar a la implantada por Musk en X (ex-Twitter).

Musk ha dejado claro su objetivo: recortar el presupuesto de Estados Unidos en cerca de 30%, pero solo podrá proponer, ya que la palabra final la tendrá el Congreso.

Ha trascendido que Elon Musk pretende instalar por seis meses a dos ejecutivos en cada una de las más importantes agencias del Gobierno con el fin de que recorten costos.

Las reformas "Rogernomics" de Nueva Zelanda

"Rogernomics". Así se conoce el proceso de reformas económicas impulsadas en Nueva Zelanda a mediados de los años 80, por su entonces ministro de Finanzas, Roger Douglas.

Estas apuntaban a dar un giro a la sobrerregulación que abogaba al país. Por ejemplo, estaba prohibido hacer envíos en camiones de carga si la distancia excedía los 150 millas (241,4 kilómetros), esto con el fin de proteger a la industria nacional de ferrocarriles, y para hacer compras en el exterior se necesitaba permiso del gobierno.

Por ello las reformas, entre otros efectos, eliminaron las restricciones a la competencia que existían en sectores como transporte y telecomunicaciones. Asimismo, se derogaron subsidios como el que recibían los agricultores por cada oveja que tenían. Muchos granjeros estaban preocupados de tener un determinado número de animales, para recibir el subsidio, que de alimentarlos bien para que estos sean productivos.

Para las reformas también llegaron al sector público: las empresas estatales se transformaron en corporaciones autónomas, teniendo que funcionar de manera similar a empresas privadas, incluyendo la necesidad de obtener financiamiento para sus inversiones en el mercado de capitales. Al punto que el Ejecutivo sostenía que no rescataría a una empresa estatal que estuviera camino a la quiebra.

Por otra parte, las municipalidades pasaron a controlar los puertos y a competir entre sí para atraer el máximo de carga.

Para el espíritu reformista de Nueva Zelanda no ha cesado. Así, en 2016, Auckland liberalizó los normos urbanísticos y la regulación inmobiliaria. Se calcula que hasta entonces, cada año se entregaban 5.000 licencias de obra. Tras la aprobación de la reforma, el desarrollo de viviendas se multiplicó, por tres en apenas cinco meses, con lo que la entrega de licencias pasó a 15.000 por año. Además, se eliminaron algunas limitaciones a la densificación de la ciudad.



España ha reducido plazos para las evaluaciones ambientales de los proyectos.

Simplificando regulaciones

España, Portugal e Israel son tres buenos ejemplos de iniciativas para simplificar las regulaciones ambientales. Así se desprende de un estudio de Pivotes publicado en mayo del año pasado. ¿Qué hicieron estos países?

En el caso de España, desde 2013 ha promulgado diversas legislaciones para, por ejemplo, unificar bajo una sola norma lo que anteriormente estaba disperso en distintas disposiciones.

Asimismo, antes existía un solo procedimiento para la evaluación y el estudio del impacto ambiental, por lo que se agregó uno simplificado. Este apunta a "aquellos planes, programas o proyectos que, tras un análisis preliminar, se considera que no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente o que, siendo de menor envergadura, pueden ser evaluados de manera más ágil".

De igual modo, se establecieron los plazos para las evaluaciones ambientales simplificadas a tres meses, mientras que para la evaluación ordinaria se redujo a cuatro meses, prorrogables por dos meses más por razones justificadas. En el caso de Portugal, desde 2010 el gobierno ha adoptado iniciativas para generar un marco normativo más simple y expedito, identificando, hasta el año pasado, 1.589 disposiciones legales que

cayeron en desuso".

De acuerdo con Pivotes, uno de los programas determina que al aprobar una nueva legislación se deben identificar normas que se volverían redundantes, innecesarias y obsoletas, mientras que la directiva "Quanto Custa?" busca "cuantificar los costos para el sector privado de cualquier nueva normativa y medir dichos costos frente a los beneficios esperados".

A esos, según un documento del Centro de Estudios Públicos, se agregan políticas sectoriales. Por ejemplo, en materia urbana se aumentó el ámbito de acciones de desarrollo urbano que "quedarán exentas de controles ex ante".

Esta nueva legislación incluye un cronograma de plazos máximos para resolver estos permisos que van de 120 a 200 días hábiles. En caso de excederse estos plazos, opera una aprobación automática del proyecto (silencio positivo), dejando así "generarse un certificado a partir del cual pueden comenzar a desarrollarse las obras".

En el caso de Israel, entre otras normativas, se instruye a cada ministerio a elaborar planes quinquenales que incluyan medidas concretas y específicas que permitan reducir las cargas regulatorias para cada uno de los años contemplados en dicho plan.

